

	PAGINA		PAGINA
Diputación Provincial de Murcia. Concurso para suministro de pan.	439	Ayuntamiento de Casavieja (Avila). Subasta para aprovechamiento de maderas.	440
Ayuntamiento de Alicante. Concurso-subasta de obras.	439	Ayuntamiento de Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife). Adjudicación de concurso de asistencia técnica.	440
Ayuntamiento de Barbate (Cádiz). Subasta de servicio de recogida viaria y domiciliaria de residuos.	439	Cabildo Insular de Gran Canaria. Concurso para adquirir e instalar equipo de rayos X.	440
Ayuntamiento de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife). Concurso para contratar servicios de recaudación.	440		

## Otros anuncios

(Páginas 441 a 446)

# I. Disposiciones generales

## MINISTERIO DE DEFENSA

**280** *ORDEN de 28 de diciembre de 1979 por la que se delegan atribuciones en materia de contratación administrativa.*

La facultad de formalizar los contratos en representación del Estado podrá ser ejercida por un Oficial General o particular de los que apoyan a la autoridad constituida en órgano de contratación, según dispone el punto 4 de la Orden del Ministerio de Defensa de 17 de abril de 1978, que desarrolla el Real Decreto número 582/1978, de 2 de marzo, por el que se desconcentran atribuciones en materia de contratación administrativa.

En su virtud, y atendiendo a la propuesta del Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo, a tenor de lo preceptuado en el punto 4 de la Orden de este Departamento de 17 de abril de 1978 y artículo cuarto del Real Decreto 582/1978, de 2 de marzo, vengo en disponer:

Artículo 1.º Cuando el Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo no concurra a la formalización de los contratos administrativos de su competencia, podrán éstos ser formalizados, por delegación de aquella autoridad, por el Intendente de la Zona Marítima en el ámbito territorial respectivo.

Art. 2.º Al formalizar el contrato, las autoridades delegadas harán constar esta circunstancia y citarán la fecha de la presente Orden.

Madrid, 28 de diciembre de 1979.

RODRIGUEZ SAHAGUN

**281** *ORDEN de 28 de diciembre de 1979 por la que se delegan atribuciones en materia de contratación administrativa.*

La facultad de formalizar los contratos en representación del Estado podrá ser ejercida por un Oficial General o particular de los que apoyan a la autoridad constituida en órgano de contratación, según dispone el punto 4 de la Orden del Ministerio de Defensa de 17 de abril de 1978, que desarrolla el Real Decreto número 582/1978, de 2 de marzo, por el que se desconcentran atribuciones en materia de contratación administrativa.

En su virtud, y atendiendo a la propuesta del Capitán General de la Zona Marítima del Cantábrico, a tenor de lo preceptuado en el punto 4 de la Orden de este Departamento de 17 de abril de 1978 y artículo cuarto del Real Decreto 582/1978, de 2 de marzo, vengo en disponer:

Artículo 1.º Cuando el Capitán General de la Zona Marítima del Cantábrico no concurra a la formalización de los contratos administrativos de su competencia, podrán éstos ser formalizados por delegación de aquella autoridad, por los siguientes Oficiales particulares:

El Jefe de Intendencia de la Escuela Naval Militar en el ámbito territorial de su respectiva competencia.

Los Jefes de Intendencia de las provincias marítimas de Bilbao, San Sebastián, Santander, Vigo y Villagarcía de Arosa en el ámbito territorial de la respectiva Comandancia Militar de Marina.

El Intendente de la Zona Marítima del Cantábrico en los demás contratos del ámbito territorial de la Capitanía General de la Zona.

Art. 2.º Al formalizar el contrato, las autoridades delegadas harán constar esta circunstancia y citarán la fecha de la presente Orden.

Madrid, 28 de diciembre de 1979.

RODRIGUEZ SAHAGUN

**282** *ORDEN de 28 de diciembre de 1979 por la que se delegan facultades a favor del Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social para la aplicación del Real Decreto-ley 6/1978, de 6 de marzo, y Real Decreto-ley 46/1978, de 21 de diciembre.*

En uso de las facultades establecidas en el artículo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, texto refundido de 26 de julio de 1957, dispongo:

Artículo 1.º Quedan delegadas en el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social las atribuciones que corresponden al Ministro de Defensa en los asuntos relativos a la aplicación del Real Decreto-ley 6/1978, de 6 de marzo, y Real Decreto-ley 46/1978, de 21 de diciembre.

Art. 2.º No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministro puede avocar para sí el conocimiento y resolución de los que considere oportunos.

Art. 3.º Siempre que se haga uso de la delegación, deberá hacerse constar así en la resolución pertinente.

Madrid, 28 de diciembre de 1979.

RODRIGUEZ SAHAGUN

**283** *RESOLUCION del Mando de Material del Ejército del Aire por la que se delegan determinadas atribuciones en materia de transportes militares en el Director de Abastecimiento de este Mando.*

La Orden ministerial número 2691/1979, de 24 de julio, regula la concesión de transportes y expedición de pasaportes en el Ejército del Aire, siendo competencia de mi autoridad ordenar los correspondientes a las Unidades Aéreas de mi mando para todo el territorio nacional en las materias expresadas en los artículos segundo y tercero de la indicada Orden ministerial.

De conformidad con el espíritu de lo previsto en los artículos 21 y 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y artículo cuarto del Decreto 1408/1966, de 2 de junio, de adaptación de la Ley de Procedimiento Administra-

tivo a los Departamentos militares, al objeto de conseguir una mayor agilidad administrativa, y previa la aprobación del Ministro de Defensa, acuerdo:

1.º Delegar en el Director de Abastecimiento, dependiente de mi autoridad, las atribuciones que me concede el artículo segundo de la Orden ministerial 2691/1979, de 24 de julio, en lo referente a los transportes de materiales dentro del territorio nacional para las Unidades Aéreas subordinadas a dicho mando.

2.º Las atribuciones delegadas conforme a lo que antecede podrán ser objeto en cualquier momento de avocación.

3.º La presente delegación entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de noviembre de 1979.—El General Jefe del Mando de Material, Emilio O'Connor Valdivielso.

## MINISTERIO DEL INTERIOR

284

**CORRECCION de errores de la Orden de 13 de diciembre de 1979 por la que se adaptan las circunscripciones de la Policía Nacional al ámbito territorial de las Jefaturas Superiores de Policía.**

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 312, de fecha 29 de diciembre de 1979, página 29811, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Donde dice: «Séptima circunscripción de la Policía Nacional con cabecera en Oviedo y comprendiendo las provincias de León, Oviedo, Palencia y Santander»; debe decir: «Séptima circunscripción de la Policía Nacional con cabecera en Oviedo y comprendiendo las provincias de León, Oviedo y Santander».

Donde dice: «Decimosegunda circunscripción de la Policía Nacional con cabecera en Valladolid y comprendiendo las provincias de Cáceres, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora»; debe decir: «Decimosegunda circunscripción de la Policía Nacional con cabecera en Valladolid y comprendiendo las provincias de Cáceres, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora».

## Mº DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

285

**REAL DECRETO 2017/1979, de 7 de diciembre, por el que se amplían, en materia de agricultura, las transferencias de competencias de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña, Diputación General de Aragón, Consejo del País Valenciano, Junta de Andalucía y Consejo General Interinsular de las islas Baleares.**

Los Reales Decretos mil trescientos ochenta y tres/mil novecientos setenta y ocho, de veintitrés de junio; doscientos noventa y ocho/mil novecientos setenta y nueve, doscientos noventa y nueve/mil novecientos setenta y nueve, ambos de veintiséis de enero; seiscientos noventa y ocho/mil novecientos setenta y nueve, de trece de febrero; dos mil doscientos diez/mil novecientos setenta y nueve y dos mil doscientos cuarenta y cinco/mil novecientos setenta y nueve, ambos de siete de septiembre, por los que se transfirieron competencias de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña, Diputación General de Aragón, Consejo del País Valenciano, Junta de Andalucía y Consejo General Interinsular de las islas Baleares, regularon en el capítulo primero de cada uno de los mismos, la transferencia de competencias, en materia de Agricultura, a dichos Organos preautonómicos, resultando oportuno ahora ampliar el traspaso de funciones previstas en alguno de los apartados, sobre la base de los trabajos efectuados en el seno de las correspondientes comisiones mixtas de transferencias y a la vista de las propuestas formuladas por dichas comisiones, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo tercero de los Reales Decretos-leyes dos mil quinientos cuarenta y tres/mil novecientos setenta y siete, de treinta de septiembre; cuatrocientos setenta y cinco/mil novecientos setenta y ocho, cuatrocientos setenta y siete/mil novecientos setenta y ocho, ambos de diecisiete de marzo; ochocientos treinta y dos/mil novecientos setenta y ocho, de veintisiete de abril, y mil quinientos diecisiete/mil novecientos setenta y ocho, de trece de junio, por los que se desarrollaron los Reales Decretos-leyes que en cada caso aprobaron el régimen preautonómico de los respectivos territorios.

En su virtud y haciendo uso de la autorización contenida en los artículos sexto, c), y noveno del Real Decreto-ley cuarenta y uno/mil novecientos setenta y siete, de veintisiete de septiembre; octavo, c), y doce del Real Decreto-ley ocho/mil novecientos setenta y ocho, de diecisiete de marzo; octavo, c), y doce del Real Decreto-ley diez/mil novecientos setenta y ocho, de diecisiete de marzo; octavo, c), y doce del Real Decreto-ley once/mil novecientos setenta y ocho, de veintisiete de abril, y quinto, c), y once del Real Decreto-ley dieciocho/mil novecientos setenta y ocho, de trece de junio; a propuesta del Ministro de Administración Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de diciembre de mil novecientos setenta y nueve,

### DISPONGO:

Artículo primero.—*Sanidad Vegetal.* Se transfieren a la Diputación General de Aragón, Consejo del País Valenciano, Junta de Andalucía y Consejo General Interinsular de las islas Baleares, en su respectivo ámbito territorial de actuación y dentro del campo de la protección de los vegetales y sus productos, las funciones que, siendo actualmente competencia del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica, Organismo autónomo adscrito a la Dirección General de la Producción Agraria, a continuación se relacionan:

a) La Gestión del Registro de Productores y Distribuidores de Productos y Material Fitosanitario, informando periódicamente a los Servicios de la Administración del Estado.

b) Proponer la autorización de la utilización, en circunstancias especiales y con las debidas garantías, de productos fitosanitarios en supuestos distintos a los expresamente recogidos en el Registro Central, o limitaciones derivadas de la Orden ministerial de nueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco para prevenir daños a la fauna silvestre.

c) Ejercer todas las funciones encomendadas a las estaciones de aviso agrícolas en los artículos tercero (excepto las especificadas en el apartado d), cuarto y quinto de la Orden ministerial de Agricultura de veintiséis de julio de mil novecientos setenta y tres.

Artículo segundo.—*Viticultura y Enología.* Uno. Se transfieren a la Generalidad de Cataluña, al Consejo del País Valenciano y a la Junta de Andalucía las funciones encomendadas a las Estaciones de Viticultura y Enología por el artículo tercero del Real Decreto mil quinientos veintitrés/mil novecientos setenta y siete, de trece de mayo, con los condicionantes siguientes:

a) En materia de análisis, se seguirá la normativa establecida por el Estado con carácter general, de acuerdo con las directrices de la Comisión Oficial de Laboratorios y Métodos de Análisis del Ministerio de Agricultura y con los Acuerdos Internacionales.

b) A petición de los interesados o de los Organismos de la Administración que controlen los vinos y productos de las industrias enológicas y afines, se deberán realizar los análisis convenientes de dichos vinos y productos que vayan a ser exportados por puertos, aeropuertos y fronteras situados en sus respectivos territorios, con independencia de la procedencia de dichos productos o de la radicación de los exportadores.

c) El carácter de «Certificado Oficial» de los certificados expedidos al amparo del apartado e) del citado artículo tercero, exigirá la delegación expresa del Ministerio de Agricultura.

Dos. Para el cumplimiento de estas funciones, se transfieren a la Generalidad de Cataluña, al Consejo del País Valenciano y a la Junta de Andalucía las Estaciones de Viticultura y Enología, adscritas al Instituto Nacional de Denominaciones de Origen por el Real Decreto mil quinientos veintitrés/mil novecientos setenta y siete, de trece de mayo, ubicadas en los respectivos territorios de dichos Entes.

Tres. Las Estaciones de Viticultura y Enología transferidas deberán participar en la realización de programas, trabajos de colaboración y tareas que tengan repercusión en el ámbito nacional e internacional.

Cuatro. Por el Ministerio de Agricultura se establecerá la adecuada coordinación de la labor de las Estaciones de Viticultura y Enología transferidas.

Artículo tercero.—Se recogen en el anexo del presente Real Decreto las disposiciones legales afectadas por las transferencias a que se refieren los dos artículos anteriores.

Artículo cuarto.—El Gobierno, a propuesta de las Comisiones Mixtas de transferencia de competencias a la Generalidad de Cataluña, Diputación General de Aragón, Consejo del País Valenciano, Junta de Andalucía y Consejo General Interinsular de las islas Baleares, procederá a determinar los medios personales, presupuestarios y patrimoniales que han de ponerse a disposición de los referidos Entes, para realizar la gestión y administración de las funciones y servicios de la Administración del Estado transferidos por el presente Real Decreto.